



HUMANISTA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

Consejo Editorial

Eloy Salmerón Díaz
Presidente
Victorino López Gonzaga
Director
CONSYCOMER SA DE CV
Estilo y Diseño Grafico

Edición
CONSYCOMER SA DE CV
Impresión:
Calle 2, Colonia Icacos,
Número 4, C.P. 39860,
Acapulco de Juárez,
Guerrero.

SOBRERREPRESENTACIÓN Y DEMOCRACIA

POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL-POLÍTÓLOGO
@FERDOVAL



En los próximos días, las autoridades electorales habrán de definir la conformación del Congreso de la Unión, al asignar los diputados de representación proporcional que corresponden a cada partido con base en la votación que obtuvieron.

Existe el riesgo de que esta asignación sobrerrepresente a los partidos de la coalición gobernante -Morena, PT y Verde-, quienes aspiran a conseguir el 74% de la representación de la Cámara de Diputados, a pesar de haber obtenido el 54% de los votos.

Según el oficialismo, la Constitución permite una sobrerrepresentación de hasta el 8% por partido, pero no dice nada acerca de coaliciones. Sin embargo, este argumento es bastante endeble.

Hay que recordar que las sucesivas reformas políticas que se han llevado a cabo desde 1963 han buscado que la representación legislativa se acerque lo más proporcionalmente posible a las preferencias de los ciudadanos expresadas en las urnas.

Es así como primero se establecieron los diputados de partido (1963), después los de representación proporcional (1977) y luego se fijaron límites a la sobrerrepresentación (1996). Eso ha permitido que las minorías estén representadas en correspondencia con su número de votos.

La pluralización del Congreso en México ha sido parte esencial de nuestro proceso de democratización.

El doctor Diego Valadés lo ha argumentado de una forma impecable y, a mi parecer, irrefutable: el artículo 54 de la Constitución establece que ninguna fuerza política puede contar con más de 300 diputados, tanto de mayoría como de representación proporcional.

Ese mismo artículo señala que para acceder a la representación proporcional un partido debe registrar candidatos de mayoría en al menos 200 distritos uninominales, y ninguno de los tres partidos -Morena, PT y Verde- lo hizo, ya que entre los tres registraron entre 50 y 60 candidaturas de mayoría, y las restantes las registraron como coalición.

Por consiguiente, es la coalición la que puede beneficiarse del tope del 8% de sobrerrepresentación que permite la Constitución, y no cada partido en lo individual, pues ninguno de los tres cumplió con el requisito constitucional de registrar candidatos en al menos 200 distritos.

Lo que está por decidirse en los próximos días es simple y sencillamente el futuro de la democracia en México. Si se aprueba la sobrerrepresentación de Morena y aliados, no solamente se castigará a las minorías políticas, sino que se permitirá que llegue a buen puerto la agenda autoritaria de reformas constitucionales que se han propuesto para dismantelar nuestro Estado de Derecho y que requieren una mayoría calificada que no fue otorgada por los ciudadanos.



LA CONSTITUCIÓN HA MUERTO

POR JORGE TRIANA, EXDIPUTADO

FEDERAL

En 1903, en el marco del aniversario de la Constitución de 1857, Ricardo Flores Magón utilizó la frase "La Constitución ha muerto" como un grito de protesta y un llamado a la acción para transformar radicalmente la realidad del país.

Su declaración se convirtió en un símbolo de

resistencia y de descontento frente a un sistema que no cumplía su propósito fundamental de brindar seguridad y justicia a los ciudadanos. Esta frase, en su contexto histórico, representa la decepción de un país traicionado por su gobierno y la necesidad de reconstruirlo sobre bases de verdadera libertad y justicia.

En el contexto de la reforma recientemente aprobada por Morena y sus aliados, la sombra de la historia parece proyectarse de nuevo. Tal como en tiempos del porfiriato, vemos cómo los derechos constitucionales pretenden ser anulados por un régimen que parece decidido a someter la Constitución a su hegemonía, ignorando los fundamentos democráticos y el equilibrio de poderes.

Esta reforma, mal llamada de "supremacía constitucional", es en realidad una concesión a la hegemonía del poder ejecutivo y del partido en el gobierno, que busca moldear la Constitución a sus intereses, sin controles judiciales ni limitaciones legales. La propuesta, aprobada sin debate y quizá sin quórum por los legisladores oficialistas, tiene como objetivo desactivar cualquier capacidad de resistencia o control por parte de la Suprema Corte de Justicia, la única institución capaz de frenar el avance de medidas inconstitucionales y proteger los derechos y libertades.

Sheinbaum ha defendido esta reforma con el argumento de que la elección popular confiere legitimidad absoluta, como si el solo hecho de haber sido electos bastara para eximirlos de autoritarismo. La historia demuestra que el simple acto de ganar una elección no es garantía de respeto a los principios democráticos. Adolf Hitler y Benito Mussolini fueron electos; Hugo Chávez y Daniel Ortega también llegaron al poder por la vía democrática, solo para transformar sus países en regímenes autoritarios. La reforma de Morena y Sheinbaum evoca estas peligrosas reminiscencias al crear un marco que blinda sus acciones y les da carta abierta para manipular la Constitución a su conveniencia, sin posibilidad de revisión alguna.

La reforma es una clara medida de blindaje contra cualquier intento de anular la tóxica reforma al poder judicial, por ser esta inconstitucional y violatoria de tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Es más, el Senado ha solicitado formalmente a la Suprema Corte que sobresea toda impugnación presentada en el pasado contra esta reforma, ignorando deliberadamente el principio de irretroactividad de la ley.

El gobierno argumenta que esta reforma es solo una ratificación de la ley de amparo, específicamente del artículo 61, fracción I, que declara improcedente el amparo contra reformas constitucionales. Sin embargo, va mucho más allá: busca impedir que cualquier ministro pueda cuestionar o revisar reformas constitucionales, volviendo intocables incluso aquellas que puedan violentar derechos fundamentales o que se aprueben sin el debido proceso legislativo.

Esta reforma autoritaria no solo invalida el recurso de amparo, sino que también impide las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, eliminando la capacidad de cualquier juzgador para interpretar y aplicar la Constitución cuando existen contradicciones entre sus disposiciones.

Esto, en un contexto en el que la mayoría legislativa de Morena ha aprobado reformas regresivas con alarmante rapidez y con una preocupante falta de rigor jurídico. Al aprobar reformas sin los consensos necesarios o sin respeto al proceso legislativo, Morena impone su voluntad sobre la ley y crea un peligroso precedente que tiende a demoler nuestra estructura democrática.





Sheinbaum asegura que esto no es autoritarismo. Pero, ¿cómo llamar entonces a un gobierno que se adjudica el poder de legislar sin negociación, sin respeto por el debate y sin permitir la intervención de la oposición? Con esta reforma, el Congreso podría imponer en la Constitución disposiciones que violen abiertamente los derechos humanos o incluso medidas atroces, como la tortura o el retiro del derecho al voto, sin que los ciudadanos tengamos un recurso para detener tales abusos.

Nos aseguran que este régimen es benevolente, y que no darán mal uso a la reforma. Pero ya han demostrado sus tendencias autoritarias y su insaciable apetito de poder. Y, aun si este gobierno no tomara esas medidas extremas, la reforma abriría la puerta para que futuros gobiernos utilicen estos instrumentos para pisotear los derechos de los mexicanos.

Hoy, más que nunca, la advertencia de Flores Magón cobra vida. Con esta reforma, la Constitución quedará, como en tiempos del porfiriato, como una carcasa vacía, una declaración de buenas intenciones sin sustancia ni protección efectiva para el ciudadano.

Corresponde a los ciudadanos levantar la voz para recordar que el poder emana del pueblo y que debe ejercerse en defensa de los derechos y libertades que tanto nos ha costado conquistar. Una reforma aprobada al vapor y emanada de una supermayoría fraudulenta no puede ser la sentencia de muerte de nuestra Constitución y de nuestra República.

LA MUERTE DE LA LEY

"No se trata de una contraposición entre derecho y política, sino entre derecho e injusticia". Otto Bachof



No hay antecedente de tan brutal desaseo e irresponsabilidad.

Las normas jurídicas son el último reducto de una ética imprescindible para una convivencia pacífica. Tan es así que si se desacatan, el Estado hace uso de su autoridad para obligar su cumplimiento y sancionar al desobediente.

El mundo vive hoy una grave crisis de lo que se ha denominado conciencia de lo legal o el resquebrajamiento del sentimiento jurídico. Donald Trump no les ganó a los demócratas ni a Kamala Harris. Derrotó durante cuatro años, mediante todo tipo de artimañas, al sistema jurídico que por más de dos siglos había acreditado un sólido prestigio de respetabilidad y de estricta observancia.

La culminación de esta patética y trágica historia se dará cuando se indulte a sí mismo y alcance la inmunidad y la impunidad, dos fatales enfermedades que corroen la certeza, la confianza y la predictibilidad características del Estado de derecho.

Vayamos a nuestro caso. Si de usted dependiera elegir entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial para decir la última palabra sobre una reforma a nuestra Carta Magna, ley fundamental, ley de leyes, evidentemente –creo yo– lo haría por el órgano colegiado, integrado por peritos reconocidos por su larga trayectoria como jueces confiables.

Pues justo con la monumental aberración, mal llamada supremacía constitucional, se despojó a la institución más idónea para una tarea tan relevante.

No hay peor técnica que legislar para el caso. Esto es, despojar a las leyes de su característica esencial: ser general y de vigencia permanente. En este caso la motivación fue vencer a quienes se les considera adversarios.

Con apenas unos días, al nuevo gobierno ya podemos llamarlo “de vencidas”. No busca convencer ni alcanzar acuerdos ni concertar voluntades. Quiere dominar, sentimiento típico del despotismo.

Los órganos colegiados encargados de tomar decisiones no están politizados, están partidizados irreductiblemente.

La Suprema Corte (7-4), el Tribunal Electoral (incompleto, 3-2), el INE (6-5), la Cámara de Senadores (87-41), la Cámara de Diputados (364-136). Aclaro que este cálculo, para nuestra desgracia, se seguirá alterando en la medida en que siga degradándose nuestra vida pública.

Se modificaron 39 artículos de la Constitución en poco más de dos meses. Nunca en nuestra historia se había visto tal denuedo para bajarla de su nicho. No hay antecedente de tan brutal desaseo e irresponsabilidad.

Dos respuestas se dan para pretender justificar el descomunal atropello, una: “Es un cambio de régimen”. Desde nuestros documentos fundacionales se viene sosteniendo que somos una República, representativa, federal y democrática.

En fecha reciente se agregó laica. ¿Pretende la cacareada 4T modificar las características, resultado de la filosofía liberal y de las ideas de la Ilustración, que siempre han sido nuestros principios básicos y a los que hemos pretendido cumplir en nuestro sinuoso devenir histórico? Ésos son los objetivos de nuestra transición a la que anhelamos arribar.

La segunda respuesta es más laconica: “El pueblo manda”. Yo me pregunto, ¿cuándo y cómo lo hizo? Me afligen los “voceros del pueblo”.

¿Pedro Haces desde Nueva York? ¿Gerardo Fernández Noroña afirmando “tengan para que aprendan”? ¿Los legisladores que dieron un giro a todas luces inmoral? ¿La sesión sin quórum del “poder constituyente permanente”? ¿Los congresos locales que aprobaron las reformas sin haberlas leído? ¿El ministro que sin importar las consecuencias evade su responsabilidad con la teoría legaloide de que no tiene competencia para entrar al fondo del asunto? Sinceramente, no creo que convenzan a nadie.

Por último, transmito el sentir de muchos mexicanos que estamos en ascuas ante una Presidenta que, en lugar de vigorizar su liderazgo, parece más débil y ambivalente. Me apanica pensar que habrá de sentarse con un hombre de gran poder, arbitrario y soberbio. En esos encuentros se definirá el futuro de México.

Juan José Rodríguez Prats
Políticas de principios

ANATOMÍA DEL FRAUDE ELECTORAL EN LA REFORMA JUDICIAL

Por Carlos Loret de Mola



El “cambio de régimen” está montado en un gran fraude electoral. La piedra El “cambio de régimen” está montado en un gran fraude electoral.

La piedra angular de esa transformación –la reforma al Poder Judicial– se está consiguiendo gracias a una sucesión de prácticas mafiosas y mañosas que en otros tiempos hubieran sido brutalmente criticadas por el grupo político que hoy las implementa.

1.- Manipulación en campaña. Claudia Sheinbaum justifica su reforma judicial diciendo que por eso votó la gente. Mentira. Esto no fue por lo que votó la gente. Eso no fue lo que le explicaron a la gente: según las mismas encuestas que tanto presumen, la gente está en contra de usar la tómbola como método de selección de futuros jueces, magistrados y ministros. Todos prefieren que estén los más preparados, incluso por encima de los que sean más populares.

2.- Urnas embarazadas. La cooptación de los órganos electorales les permitió ganar el 57% de los votos, pero tener el 73% de las curules. Les regalaron 9 millones de votos que no les dio la ciudadanía. Les embarazaron las urnas, pues. Gracias a eso, pudieron aprobar la reforma judicial. Si no, no hubiera pasado en la Cámara de Diputados.

3.- Compra de votos. En el Senado les faltaban tres votos para la mayoría calificada. Dos de ellos los obtuvieron ofreciendo prebendas (posiciones en la Cámara que les representaban dinero) a los dos senadores que llegaron por el PRD.

4.- Extorsión. El voto faltante lo obtuvieron aprovechándose de la cola larga de los Yunes, a quienes apenas unos días antes tachaban de criminales, rateros y corruptos.

5.- Secuestro exprés. Para amarrar la mayoría calificada en el Senado, el día de la votación de la reforma judicial, mantuvieron encerrado e incomunicado a un senador de Movimiento Ciudadano (su explicación del secuestro, o autosecuestro, no convenció a nadie, pero MC prefirió echar el escándalo de traición bajo la alfombra).

6.- Acarreo. Dos días antes del cierre de inscripciones para candidatos a juzgadores había apenas poco más de 8 mil inscritos. Pero el fin de semana, en 48 horas, “mágicamente” creció el entusiasmo y terminaron más de 49 mil inscritos. Fue un descarado acarreo de licenciados. Se inscribieron 13 abogados por minuto.

7.- Partido de Estado. Es falso que la gente podrá votar por quien quiera para juez o magistrado. La lista final de quienes aparecerán en las boletas la decidirán los miembros de tres comités de evaluación. Dos de esos tres comités están controlados por Morena. Con ese filtro podrán dar preferencia a los suyos y eliminar a los que les estorben.

De entrada, más del 90% de los aspirantes se apuntaron en los comités de Morena. La tajada del león.

Por si lo anterior fuera poco, ya viene el siguiente fraude: recortarle al INE presupuesto para que instalen menos casillas, haya poca participación y con ello se facilite a Morena el control del resultado. Así podrá imponer a sus jueces, magistrados y ministros.

Ah, pero dicen que es el proceso más democrático del mundo. Mentira. Es una elección de Estado. Un fraude electoral de pies a cabeza.

¿UN NUEVO RÉGIMEN?



En la ciencia política, se entiende por régimen al conjunto de instituciones, leyes y reglas (formales e informales) que existen para administrar el poder político en un Estado.

En los últimos cien años hemos tenido en México básicamente dos regímenes políticos. El primero surgió después de la revolución. Era un régimen en el cual el poder estaba concentrado en la figura del presidente de la República, quien dominaba no solamente el poder ejecutivo, sino también el legislativo y el judicial.

Era un régimen nominalmente federal, pero en la práctica funcionaba de forma centralista, ya que el presidente tenía control sobre cualquier estado y municipio. Existía un partido hegemónico que se confundía con el gobierno. Aunque el presidente era todopoderoso durante su sexenio, no podía reelegirse ni gobernar por interpósita persona, por lo que se retiraba de la escena pública al terminar su gobierno.

Varios acontecimientos, externos e internos, obligaron a que ese régimen se democratizara de forma lenta y paulatina. El nuevo régimen que surgió tras la transición fue un régimen razonablemente democrático, donde el poder estaba dividido. Cuatro presidentes entre 1997 y 2018 tuvieron que coger gobernar con una oposición que tuvo mayoría legislativa. Así, el Congreso y el Poder Judicial fueron protagonistas de un poder compartido.

Aparecieron órganos constitucionales autónomos que administraban algún espacio de poder que se caracterizaba por su especialización técnica o su capacidad regulatoria entre posibles jugadores en conflicto. Se vivió un federalismo en donde estados y municipios ejercieron sus facultades.

Por supuesto que este régimen no era perfecto. Fruto de los acuerdos entre distintos partidos que participaron en la transición, este régimen fue permisivo con la corrupción, si bien es cierto que se aprobaron reformas importantes en materia de transparencia y rendición de cuentas.

A partir de 2018, Andrés Manuel López Obrador ha pretendido construir un nuevo régimen político.

Incluso lo ha bautizado con el nombre de “la cuarta transformación”. Es un régimen muy parecido al posrevolucionario, pero con dos diferencias sustanciales: por un lado, el poder e influencia del presidente no pretende terminarse con su mandato. Por otro lado, este nuevo régimen tiene una carga ideológica de la que carecía el régimen posrevolucionario, y que está relacionada con una cosmovisión profundamente estatista y proclive al socialismo bolivariano.

Los resultados electorales del pasado 2 de junio apuntalaron las intenciones obradoristas. El régimen que viene será autoritario, hegemónico, ideologizado y con un “hombre fuerte” tras bambalinas. Al menos esa es la intención. De consumarse, sería un ordenamiento inédito en la historia política de México.

Por Fernando Rodríguez Doval

Politólogo

@ferdoval

LA CULTURA DE LA PAZ, DESMANTELAMIENTO DE CONTRAPESOS

Pascual Hernández Mergoldd
Abogado, negociador y mediador

La venganza es un poderoso catalizador de conflictos. Un acto de venganza puede desencadenar una serie de eventos negativos que agraven la situación original; fomenta un ciclo de acción y reacción que puede escalar y propiciar situaciones peligrosas en el tejido social.

En la historia existen múltiples actos de venganza, algunos más conocidos que otros, y muchos de ellos con consecuencias trascendentales. Algunos de esos actos han sido impulsados por la sed de revancha y han dejado una huella imborrable en el devenir de las civilizaciones.

En México estamos inmersos en una ola de acciones de venganza del “obradorismo”, así lo han señalado algunos de sus principales correligionarios, traducidos en la neutralización o desmantelamiento de la Suprema Corte y los organismos autónomos que operaron como contrapesos del Ejecutivo y que para el expresidente y su gobierno significaron un obstáculo.

Los organismos constitucionales autónomos no habían dependido de ninguno de los tres poderes y su objeto fue garantizar los derechos fundamentales, así como controlar el poder del gobierno en beneficio de la ciudadanía. Su creación obedeció a la necesidad de instituir contrapesos para limitar el poder, tales como sistemas imparciales para la medición de las políticas públicas en materia económica, la transparencia, el acceso a la información pública, las telecomunicaciones y la competencia económica, entre otros.

El desmantelamiento de siete organismos autónomos: Cofece, CONEVAL, IFT, MEJOREDU, CRE, CNH e Inai que han operado como contrapesos, es un conjunto de acciones autoritarias que son posibles por el sorprendente y denigrante servilismo de los legisladores de los partidos oficialistas al “obradorismo”. Se trata de un golpe a los derechos ciudadanos y a la transparencia en la gestión pública.

So pretexto de que su eliminación significará un ahorro en las finanzas públicas, es importante saber que en el presupuesto de este año el total de las asignaciones para los siete organismos en proceso de desaparición ascendió a 4,500 millones de pesos, es decir el 0.005% del presupuesto de egresos 2024, que es del orden de nueve billones de pesos; al 1% de lo que ha costado la refinería Dos Bocas y al 0.91% de lo que cuesta el Tren Maya. Entre los organismos en proceso de desmantelamiento se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Su liquidación propiciará opacidad y corrupción.

A pesar de que cuando los actuales jerarcas gobernantes encabezados por el expresidente, siendo entonces oposición, presionaron al gobierno para la creación del IFAI, que luego se transformaría en el INAI, ahora operan su extinción. Se presume que se trata de saldar una cuenta pendiente del exmandatario que están ejecutando los legisladores oficialistas a su servicio con el aval de la presidenta, de una venganza por el acceso a la información que permitió detectar y publicar posibles actos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencia en su gobierno realizados por personas cercanas al expresidente y de jerarcas de su movimiento.

En la reforma constitucional aprobada por los diputados oficialistas para demoler a los organismos autónomos se dejó en el aire la Plataforma Nacional de Transparencia, herramienta considerada un bien del Estado mexicano que contiene 15 mil millones de registros relacionados con contratos, facturas, expedientes y reportes.

Somos testigos de cómo, embriagados de poder, el oficialismo pisotea el legado histórico, dinamita las instituciones y distorsiona la vida democrática de México, cuya construcción requirió décadas y la participación de todas las fuerzas políticas. También estamos frente a una cadena de traiciones a las instituciones que se juraron respetar y defender, de tal suerte que dejaremos de ser un Estado de derecho en la medida en la que se vayan implantando las acciones de destrucción.

La venganza es una forma de ejercer poder sobre otra persona, grupo, sectores de un tejido social o sobre toda una sociedad; impide que se haga justicia de manera justa y equitativa y puede destruir relaciones, comunidades, incluso naciones, también a la cultura de la paz. Se trata de un sentimiento complejo, de un ciclo que puede ser difícil de romper y llevar a tomar decisiones dañinas tanto para uno mismo como para los demás, en el caso que comentamos los daños serán para todos, incluidos quienes han respaldado las medidas de destrucción institucional, sus familias, sus hijos, sus nietos y sus amigos. Resulta absurdo que crean que el manto de la impunidad les cubrirá siempre.

En sentido opuesto a la concentración del poder político que propicia el gobierno y en perjuicio de cada vez más personas, se tolera que el crimen organizado ejerza la soberanía y la gobernabilidad en cada vez más regiones del país donde sus habitantes son víctimas de la abrumadora y progresiva violencia en todas sus expresiones.

Los mexicanos estamos transitando por una cada vez más penosa y compleja situación, sometidos a las acciones de venganza del “obradorismo” con la idea de que los ciudadanos son sus subordinados, y a la creciente violencia del crimen organizado, para quienes somos o seremos sus víctimas.

El debilitamiento del tejido social y de las personas mediante acciones negativas e implacables, como la permanente polarización que caracteriza al “obradorismo”, es reversible. Urge retomar el rumbo hacia un mejor México y rescatar la cultura de la paz. Para ello la voluntad política de la presidenta es fundamental.